



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

17362/2010.-

“ADMINISTRADORA CLUB CAMPO PUEYRREDON S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. -
RESOL 11/09 6/10 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA”.

///nos Aires, 14 de febrero de 2025.- AMD

Y VISTOS, CONSIDERANDO:

I.- Que, por medio del [pronunciamiento](#) del 22/03/24, la instancia de origen rechazó la demanda intentada con costas.

Para decidir de tal modo, relató los antecedentes del caso y los argumentos esgrimidos por las partes, al tiempo en que indicó que debía analizarse si la parte actora cumplía con los requisitos normativamente establecidos para ser considerada sujeta al Impuesto a las Ganancias (atendiéndose especialmente a la confusión del patrimonio existente entre la Administradora y los propietarios de las parcelas).

Con la finalidad de esclarecer ese punto e inclinarse por la afirmativa, citó el artículo 2° de la ley del tributo y explicó que, no solamente la entidad prestaba servicios remunerados de mantenimiento y conservación de los bienes comunes a los propietarios de los lotes del Club de Campo, sino que también realizaba compras y suscribía otros contratos a nombre propio (diferenciándose de los mentados propietarios) e, incluso, poseía facultades de decisión sobre los derechos de utilización de las instalaciones sociales y deportivas.

Luego, examinó si la accionante resultaba merecedora de la dispensa legal contenida en el artículo 20, inciso “f” de la norma (en su versión vigente para el año 1997 –actual artículo 26, inciso “f”, según texto ordenado en 2019).

En particular, precisó que: “[p]ara encuadrarse en la exención del 20 inc. f de la Ley, se requiere, que se trate de un ente cuyo objeto social sea el desarrollo de una actividad de fin público tales como las enunciadas; que el ente responda al tipo asociativo enunciado en la ley (esto es: Asociaciones, Fundaciones o Entidades Civiles); que se verifique que, las ganancias obtenidas por el desarrollo de las precitadas actividades y el patrimonio del ente, se destinen al objeto de su creación, así como que las mismas no se distribuyan entre los socios y que no desarrollen actividades comerciales y/o industriales [...]”.

Además, citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación Rosarina de Anestesiología c/Fisco Nacional”, el 16/11/2009, oportunidad en la cual, adujo, se distinguieron las situaciones en las cuales las entidades se ajustaran inequívocamente a alguno de los supuestos de exención previstos por la norma, de aquellas en las cuales ello no surgiera con nitidez (caso





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

en el cual deberían realizarse mayores indagaciones respecto del carácter “público” del beneficio perseguido).

Asimismo, citó lo resuelto en un sentido análogo por la Sala III del fuero en los autos caratulados: “Bureau de Publicidad de Internet (Asoc. Civil) c/E.N. - A.F.I.P. -D.G.I.”, el 11/02/16 y, en esas condiciones, concluyó que no se encontraba suficientemente acreditada la realización de tareas que implicaran un beneficio público.

Explicó que, tal afirmación, tenía: *“[f]undamento en los convenios celebrados por la mencionada sociedad en representación del Club de Campo, entre los que se encuentra el suscripto con la firma Watchman S.R.L.; el celebrado con la Cooperativa Telefónica de Vivienda y otros Servicios Públicos del Viso Limitada (Telviso); el contrato de Concesión Privada de Servicio Restaurante, Bar y Confitería; y contrato de Mantenimiento de Espacios Verdes [...] conforme lo indicado por el informe del área, las tareas realizadas por la actora al administrar el Club de Campo, implican prestaciones a los propietarios de los lotes, entre ellos, servicios de vigilancia, de telecomunicaciones, recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes, entre otras; las cuales no se condicen con los postulados establecidos en el inciso f) del art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que requiere la ayuda y el valor social como un fin socialmente útil [...]”*.

En esa línea argumental, insistió en que el beneficio resultante de la actividad desarrollada para los asociados debía poseer carácter público, recordó que las exenciones impositivas debían resultar de la letra de la ley y finalizó expresando que: *“[d]e acuerdo al objeto estatutario, la Administradora desarrolla como actividad central la administración de un complejo urbanístico, lo cual no resulta compatible con el objeto social que previó la norma al contemplar la exención referida [...]”*.

De otro lado, consideró que debía examinarse si la Administradora cumplía con los requisitos necesarios para ser incluida en la exención prevista por el inciso “m” del artículo 20 de la ley del Impuesto a las Ganancias, que también se encargó de citar.

Sostuvo que para gozar de la referida exención se debía verificar que la organización, desarrollo y mantenimiento de las actividades deportivas prevaleciera sobre las demás actividades que la sociedad desarrolle y, además, puntualizó que: *“[d]el análisis del 4º del Estatuto correspondiente a la firma, transcrito en el considerando VII de los presentes autos, no surge que su objeto sea acorde con el de una entidad deportiva, más aun teniendo en cuenta que no*





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

se menciona el impulso de actividad deportiva alguna, tan solo se limita a mencionar "...La conservación y mantenimiento de todas las instalaciones, espacios recreativos, deportivos y culturales que conforman el Club de Campo [...]".

Igualmente, apuntó que, conforme surgía de los estatutos y de las demás pruebas acompañadas, *"[l]os gastos de seguridad, administración y áreas públicas y residenciales insumen la mayor proporción de los importes a abonar, lo cual indica que esa actividad posee tal magnitud que evidencia su prevalencia por sobre el fin deportivo, no reuniendo los requisitos necesarios para ser considerada como entidad deportiva [...]".*

En consecuencia, tampoco consideró reunidos los supuestos requeridos por la norma citada.

Frente al escenario descripto, entendió que las Resoluciones impugnadas en el caso se encontraban ajustada a derecho, a lo que agregó diferentes consideraciones relacionadas con la presunción de legitimidad de los actos administrativos.

II.- Que, disconforme con lo resuelto, el 26/03/24 [apeló](#) la parte actora, quien [fundó](#) su recurso el 29/04/24, que fue [contestado](#) por la contraria el 21/05/24.

Reseñó los antecedentes del caso (dentro de los cuales relató la forma de constitución de la Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. y su objeto social, así como también las circunstancias relativas a las solicitudes de reconocimiento de las exenciones involucradas, que derivaron en la emisión de un certificado de reconocimiento provisional por parte del Fisco -posteriormente dejado sin efecto- y otros actos de sus reparticiones).

Luego manifestó que a los clubes de campo, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se los sujetaba (con anterioridad a la reforma introducida por el Código Civil y Comercial de la Nación) al régimen de propiedad horizontal de la ley 13.512 y, a su vez, a lo normado por la ley 8.912 (de ordenamiento territorial y uso del suelo" y su decreto reglamentario 9.404).

En ese orden de ideas, remarcó que en el año 2002 se había aprobado la transformación de la sociedad anónima en una asociación civil sin fines de lucro, utilizado la forma contenida por el artículo 3 de la ley 19.550 (circunstancia que no había merecido observaciones por parte de la Inspección General de Justicia). Asimismo, transcribió las disposiciones del estatuto que se alineaban tal afirmación.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Insistió en que ni lo anterior, ni el hecho de que la asociación tuviera por objeto ser la propietaria de las áreas comunes del emprendimiento inmobiliario denominado “Club de Campo Pueyrredón”, sin percibir retribución alguna por sus tareas, se encontraban controvertidos en la causa.

Por ello, advirtió que su parte no realizaba hecho imponible encuadrable en el Impuesto a las Ganancias y que: *“[E]llo sucede así en virtud de que los espacios comunes son -en realidad- de propiedad de los propietarios de las parcelas individuales, no habiendo en rigor de verdad patrimonios separados, teniendo a su cargo la Administradora el cobro de las expensas para hacer frente a los gastos que se generan por el mantenimiento de esos espacios comunes. No se trata de rentas, ergo, mal pueden estar gravadas con el impuesto [...]”* (sic).

Por otra parte, señaló que la pretensión fiscal dirigida a asignarles el carácter de “consumidores finales” a los consorcios de propietarios de la ley 13.512 en el Impuesto al Valor Agregado (Circular DGI N.º 1299/93) y no reconocerles (aplicando el principio de realidad económica) similar estatus a sociedades con análogo objeto y funcionamiento resultaba infundado.

Transcribió las consideraciones vertidas por el Fisco en un dictamen y reiteró que: *“[R]esulta llamativo que el Fisco sostuviera en la Resolución N° 6/10 que la actividad desarrollada por ACCP importa el desempeño de tareas propias de una empresa, por contratar -entre otros- el servicio de vigilancia para el emprendimiento o el servicio de internet o televisión por cable (que recupera de los propietarios por vía de expensas), cuando no ha dudado en calificar a los Consorcios de Copropietarios de un edificio en propiedad horizontal como “consumidores finales”, aunque también ellos contratan la provisión de los servicios de seguridad y/o televisión por cable y/o internet para los copropietarios del edificio de que se trate [...]”* (sic).

Además, estimó que esa posición adquiriría mayor vigor al considerar la regulación, en el Código Civil y Comercial, de los “conjuntos inmobiliarios” y la exigencia de sometimiento y adecuación al régimen de propiedad horizontal para aquellos preexistentes.

También contravirtió la operatividad de la cláusula 26 del reglamento (relativa a la fijación de intereses por la mora en la que pudieran incurrir los propietarios y las potestades de disposición del directorio) que citó la instancia de grado, indicando que incluso no existía en el reglamento vigente en la actualidad y que, en cualquier caso, ello tampoco era idóneo para incidir en la situación de su parte, atento a la calificación de las instalaciones sociales y deportivas como “partes comunes no indispensables” (en las que el usufructo se diferencia de las





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

“partes comunes indispensables” -que no admiten restricciones por su conexión íntima con el uso y goce de la propiedad-).

Acudió a conceptualizaciones doctrinarias de las expensas, en donde se las calificó como “una recuperación de gastos” necesarias para mantener en funcionamiento el emprendimiento.

En subsidio, entendió que procedía la inclusión de la Administradora en las exenciones previstas por los incisos “f” y “m” del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Inicialmente, manifestó que la Administradora, desde sus inicios, poseyó una condición equivalente a un consorcio de propietarios, pero que no la había podido acreditar instrumentalmente (debido a las restricciones surgidas del régimen de geodesia en cuanto al tipo jurídico a utilizarse).

En cuanto al mentado inciso “f”, postuló que los beneficios fiscales no debían interpretarse en su alcance más restringido y expresó que: *“[e]l objetivo de la asociación sin fines de lucro, aunque beneficioso de modo directo para un grupo de personas, siempre importa un provecho que, aunque sea en forma indirecta, se proyecta al bien de todo el medio social en el que funciona la entidad. En resumen, debe interpretarse que siempre se promueve el bien general, público, por la acción del grupo, núcleo, que -en principio- aparece orientado a amparar a los integrantes del mismo [...]”*.

Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y postuló que, en el caso, la finalidad de la entidad era la de administrar un complejo urbanístico y que: *“[d]icha actividad debe ser respaldada por el Estado desde que es un valor buscado y socialmente útil su desarrollo pues, en definitiva, tiende a facilitar el desarrollo de una forma colectiva de convivencia. La entidad como administradora no percibe suma alguna por su tarea y los servicios que presta son a título de mandataria de sus asociados; es decir, no lo hace con carácter empresario sino con la finalidad de facilitar el desarrollo del emprendimiento urbanístico, donde conviven un sinnúmero de residentes [...]”* (sic).

Refirió a diferentes dictámenes que, a su modo de ver, daban cuenta de que el significado de “bien común” era posible de cumplirse, aunque se limitara “exclusivamente a los asociados en una entidad” y agregó que la circunstancia de administrar un club de campo y realizar actos necesarios para el desenvolvimiento colectivo de los residentes tampoco se contraponía con ello.

Finalmente postuló que, a todo evento, correspondía que se la considerara incluida en la exención prevista por el inciso “m” del ya referido artículo 20.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Para sostener su posición, señaló que la carencia de una finalidad de lucro y la titularidad de las áreas comunes para realización de actividades deportivas en el club de campo, resultaban determinantes a los fines de determinar la admisibilidad o no de su pretensión.

III.- Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. *Fallos*: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, *in re*, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, Expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/21 y “HSBC Argentina Holdings S.A. -TF 48911-I c/D.G.I.”, Expte. N.º 19801/2021, del 01/07/22, entre muchos otros).

Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. doc. *Fallos*: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, *in re*, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, Expte. N.º 71973/2018, del 16/07/21 y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, Expte. N.º 22019/2017, sentencia del 05/12/22).

IV.- Que, frente al escenario descripto, inicialmente deben abordarse los agravios de la actora relacionados con su falta de sujeción al Impuesto a las Ganancias, por considerar que no media en la especie la realización del hecho imponible; argumentación que, desde ya corresponde adelantar, no puede tener favorable recepción.

Sobre el particular, es menester recordar que las resoluciones que aquí se pretenden impugnar (N.º 11/09 -DV CGDE- y N.º 6/10 -DI RCEN-, que la confirmó) dispusieron dejar sin efecto el certificado de “reconocimiento provisional de exención” en el Impuesto a las Ganancias del que gozaba la contribuyente y rechazar su solicitud de inclusión en el “registro de entidades exentas” (Resolución General N.º 1815/05).

En ese sentido, de los fundamentos de esos actos se desprende que la entidad presentó, en más de una oportunidad, los formularios correspondientes para obtener las exenciones reguladas por los incisos “f” y “m” del artículo 20 de la ley del tributo.

Así las cosas, queda en evidencia que son los propios actos de la recurrente los que dan cuenta de que ella se encuentra sujeta al pago del impuesto, respecto del cual pretendió obtener la referida exención.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Al respecto, recuérdese que las exenciones consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible de suerte tal que, aunque éste se halle configurado no se genera la obligación tributaria; es decir, en la exención se produce el hecho generador, pero como se configura tal hipótesis neutralizante, no se genera deuda tributaria alguna (cfr. García Vizcaíno, Catalina, “*Manual de Derecho Tributario*”, 4ª Ed. Ampliada y Actualizada, Abeledo-Perrot, La Ley, 2019, pág. 317).

En tales condiciones, resulta claro que el producto de las actividades desplegadas por la contribuyente encuadra en la definición de “ganancia gravada” que se describe sustancialmente en los artículos 1º y 2º de la ley del tributo.

Por ello, es que corresponde desestimar la posición de la apelante y confirmar, por las circunstancias descriptas, este aspecto del pronunciamiento apelado.

V.- Que, por otra parte, la pretensión actoral relacionada con los incisos “f” y “m” del artículo 20 de la ley del tributo merece las siguientes precisiones.

Inicialmente, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha acuñado una doctrina invariable en razón de la cual la franquicia rige por imperio de la ley. Es decir, las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que la establecen; fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta y restrictiva de las cláusulas respectivas (cfr. *Fallos*: 304:1736, 305:635, 314:1842, *in rebus*, “Cindor S.A. c/D.G.I.”, “Editorial La Razón” y “Fisco Nacional c/Asociación de Empleados de Comercio de Rosario”; *Fallos*: 264:144, 267:247, 281:65, 185:329, 308:2554 y 284:341, y esta Sala *in re*, “Abrain, Luis Alberto (TF 33175-I)”, expte. N.º 36148/2013, sentencia del 07/11/13 e “Ymaz, Juan Ignacio c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/D.G.I.”, sentencia del 02/02/2021).

Así, la primera de las normas citadas, en su redacción pertinente, expresaba: “[E]stán exentos del gravamen: [...] f) Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destine a los fines de su creación en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. En caso de que estas ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En caso de que esta ganancia provenga de dividendos de sociedades anónimas la Dirección devolverá el veintidós por ciento (22%) de los montos percibidos en tal concepto a condición





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

de que las entidades beneficiarias mantengan en su patrimonio durante un lapso no inferior a dos (2) años las acciones que dieron origen a la devolución; en caso contrario deberán reintegrar a la Dirección los importes que hubieren percibido por tal concepto. Se excluye de la exención establecida en el párrafo anterior a aquellas entidades organizadas jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares [...].”

Por su parte, el segundo inciso fijaba la exención de: “[L]as ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. La exención establecida precedentemente se extenderá a las asociaciones del exterior, mediando reciprocidad [...].”

Es decir, para obtener alguna de las exenciones previstas en el artículo 20 incisos “f” y “m” de la ley de Impuesto a las Ganancias se requiere, según el caso: (i) que se trate de un ente cuyo objeto social sea el desarrollo de una actividad de fin público; (ii) que responda al tipo asociativo enunciado en la ley (esto es: asociaciones, fundaciones o entidades civiles); (iii) que se verifique que las ganancias obtenidas por el desarrollo de las precitadas actividades y el patrimonio del ente se destinen al objeto de su creación y que no se distribuyan entre los socios; (iv) que dichos entes no obtengan sus recursos de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos o actividades similares; (v) que no desarrollen actividades comerciales y/o industriales y (vi) que cuando se trate de asociaciones deportivas, las actividades de esa naturaleza resulten prevalentes (cfr., en un sentido análogo, Sala III, *in re*, “Club Campos de Golf Praderas de Luján A.C. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. -Resol 112/09 (RCEN) s/proceso de conocimiento”, del [22/12/22](#)).

Frente a estas condiciones, es que debe sostenerse que la parte actora no reúne los recaudos necesarios para beneficiarse de las dispensas anteriormente citadas.

En efecto, respecto de aquella contenida en el inciso “f” es necesario advertir que, si bien la entidad reviste el carácter de asociación civil sin fines de lucro bajo la forma de sociedad anónima (que adoptó invocando el artículo 3 de la ley 19.550 y luego de modificar los artículos 1, 3, 4, 12 y 13 de su estatuto social), se encuentra suficientemente acreditada la conexión exclusiva de las ventajas





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

económicas o lucrativas percibidas por ella con los asociados, no respondiendo al concepto de “beneficio público” o “fin socialmente útil”.

El punto antecedente es suficientemente ilustrado por las consideraciones vertidas en el pronunciamiento de grado y por las constancias agregadas actuaciones administrativas, de las cuales surge que la firma actora, además de tener por objeto la realización del anteproyecto y proyecto de obras de infraestructura y recreación del Club de Campo Pueyrredón; la confección de diferentes reglamentos relacionados con las actividades a desarrollarse en ese lugar y la prestación de servicios generales, particulares y de mantenimiento dentro del complejo (cuyo producto es de distribución -cuanto menos indirecta- entre los socios), se encuentra expresamente vedada de prestar, en cualquier circunstancia, servicios a terceros de todo tipo (cfr. art. 4º del estatuto social modificado, obrante a fs. 13/37 de la Actuación N.º 10642-88-2008 -ver, en especial, fs. 15vta.-).

En tales condiciones, y en tanto debe excluirse del goce de la franquicia a aquellos supuestos en los cuales no se derive mejora alguna para el bienestar del resto de los miembros de la comunidad, es que cabe rechazar los agravios de la accionante y confirmarse el pronunciamiento apelado en este punto.

Por otra parte, lo decidido en torno a la exención contenida en el inciso “m” tampoco puede ser revertido en esta instancia, a poco que se repare en que no es susceptible de calificarse a la actora como una asociación de carácter “deportivo” o dedicada a la “cultura física”.

Aquí, es importante advertir que, el artículo 37 del decreto reglamentario de la ley del impuesto establece que: “[A] los fines de la exención del impuesto a las ganancias que acuerda el artículo 20, inciso m), de la ley, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, determinará en cada caso el cumplimiento de los requisitos exigidos por el citado inciso [...] Para establecer la relación entre las actividades sociales y las deportivas, se tendrán en cuenta los índices representativos de las mismas (cantidad de socios que participan activamente, fondos que se destinan y otros).

En otras palabras, a los efectos de gozar de la exención referida, la entidad de que se trate debe, en primer lugar, revestir el carácter de “asociación deportiva”, a cuyo efecto corresponderá verificar si la organización, fomento y/o sostenimiento de actividades deportivas prevalece sobre cualquier otra actividad que aquélla desarrolle.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II

Como puede observarse, de los términos de las disposiciones estatutarias, la documental agregada y de la descripción realizada por la instancia de grado en los párrafos 4º y 5º de la decisión bajo estudio, se verifica que, si bien es cierto que existen actividades deportivas en cuyo desarrollo se encuentra involucrada la firma actora, lo real y concreto es que, por un lado, se limita únicamente a la conservación y mantenimiento de instalaciones y, por el otro, que coexiste junto a ella otra finalidad preponderante, consistente en la organización de ciertos servicios en beneficio de los propietarios de lotes y/o viviendas (que puede constatarse en el volumen de gastos que conllevan).

Esta situación (en la que la actividad mencionada en último término - organización, administración y prestación de servicios en el complejo habitacional- reviste carácter independiente y no accesorio del mantenimiento de las instalaciones en donde se practican deportes) impide considerar a la entidad del asunto como una asociación en la cual el objeto y/u/o el desarrollo de las actividades deportivas resulte claramente preponderante, condición indispensable a fin de resultar encuadrada en los términos del artículo 20, inciso “m” de la ley del tributo.

Por ello, debe confirmarse el pronunciamiento apelado también en este aspecto.

VI.- Que, finalmente, y respecto a las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, ellas se imponen a la recurrente, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ª parte, del C.P.C.C.N.).

Como corolario de lo expuesto este Tribunal **RESUELVE: 1º)** rechazar el recurso intentado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado y **2º)** imponer las costas de esta instancia a la actora (cfr. artículo 68, 1ra. parte, del C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

